



VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por el señor **EDDY ALBERTO CUADROS CHAVARRÍA** contra la Resolución Directoral N° 000162-2023-DGDP/MC; el Informe N° 000644-2024-OGAJ-SG/MC de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 000014-2023-DCS/MC de fecha 13 de febrero de 2023, se inicia procedimiento sancionador contra el administrado, por la presunta comisión de la infracción prevista en el literal f) del numeral 49.1 del artículo 49 de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio cultural de la Nación, esto es, por realizar obras privadas no autorizadas dentro del polígono de la Zona Arqueología Monumental de Huacoy del distrito de Carabayllo de la provincia y departamento de Lima;

Que, con la Resolución Directoral N° 000162-2023-DGDP/MC de fecha 06 de diciembre de 2023, se impone sanción de demolición;

Que, el 29 de diciembre de 2023, el administrado interpone recurso de apelación argumentado que se ha violentado el principio de non bis in idem;

Que, en relación a la facultad de contradicción, el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante, TUO de la LPAG, indica que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo 218 del TUO de la LPAG;

Que, el artículo 221 del texto normativo, indica que el escrito del recurso debe señalar el acto del que se recurre y cumplir los demás requisitos previstos en el artículo 124 de la ley. Además, debe ser interpuesto dentro del plazo perentorio de quince días hábiles, ello en aplicación de lo dispuesto en el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la LPAG;

Que, de la revisión de la fecha de notificación de la resolución impugnada (06 de diciembre de 2023) contrastado con la fecha en la que se presenta el recurso de apelación (29 de diciembre de 2023) se tiene que la impugnación ha sido formulada dentro del plazo legal;

Que, la Zona Arqueología Monumental de Huacoy está declarada bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Directoral Nacional N° 1080/INC de fecha 22 de setiembre de 2000, Resolución Directoral Nacional N° 233/INC de fecha 27 de marzo de 2002 y con Resolución Directoral Nacional N° 166/INC de fecha 27 de marzo de 2003 se aprueba su plano de delimitación;

Que, a través de la Ley N° 31770, Ley que modifica la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, vigente desde el 06 de junio de 2023, en adelante



la Ley N° 31770, se modifica el literal f) del numeral 49.1 del artículo 49 de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, estableciendo únicamente una *sanción pecuniaria* por la comisión de la conducta que describe, eliminando la *demolición* como sanción alternativa;

Que, de acuerdo al principio de irretroactividad descrito en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, *salvo que las posteriores le sean más favorables*. Agrega la norma que *las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor*, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción;

Que, si bien es cierto, el procedimiento sancionador se inicia con la Resolución Directoral N° 000014-2023-DCS/MC de fecha 13 de febrero de 2023, esto es, con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 31770, cierto es también que la Resolución Directoral N° 000162-2023-DGDP/MC fue emitida en vigencia de la modificación del literal f) del numeral 49.1 del artículo 49 de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (en vigor desde el 06 de noviembre de 2023), en consecuencia, se debió evaluar si la aplicación de la sanción de demolición favorecía al administrado o, si por el contrario, la imposición de la sanción pecuniaria (multa) resultaba favorable a sus intereses;

Que, de la lectura de la Resolución Directoral N° 000162-2023-DGDP/MC no se advierte que el órgano de primera instancia haya realizado la evaluación descrita en el párrafo anterior como para determinar, en aplicación del principio de irretroactividad, la sanción a aplicar, únicamente se hace alusión a los principios de culpabilidad, razonabilidad y causalidad para determinar la sanción;

Que, el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG establece que es vicio del acto administrativo que causa su nulidad de pleno derecho la contravención a las leyes y normas reglamentarias, de lo cual se infiere que al no haberse observado el principio descrito se ha originado un vicio en la Resolución Directoral N° 000162-2023-DGDP/MC;

Que, el artículo 227 del TUO de la LPAG establece que la resolución del recurso estimará, en todo o en parte, o desestimará las pretensiones formuladas. Agrega la norma que, constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello, precisando que cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo;

Que, dada la especialidad del procedimiento sancionador y atendiendo a que por mandato legal corresponde a sus órganos realizar la evaluación y análisis de los hechos y medios probatorios aportados al procedimiento a efecto de determinar la sanción a aplicar, se advierte que el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales no tiene competencia para realizar dicho examen, por lo que corresponde disponer la nulidad de la Resolución Directoral N° 000162-2023-DGDP/MC y retrotraer el procedimiento al momento que el vicio se produjo a fin que la autoridad de primera instancia se pronuncie nuevamente;



Que, estando acreditada la causal que sustenta la declaración de nulidad de la Resolución Directoral N° 000162-2023-DGDP/MC carece de objeto pronunciarse por los argumentos del recurso de apelación;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de la LPAG, la resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico, sin embargo, de acuerdo a la Opinión Jurídica N° 018-2023-JUS/DGDNCR la disposición de actos con el objeto de hacer efectiva dicha responsabilidad procede si la autoridad advierte que la causal de nulidad podría estar vinculada a hechos calificados como ilegalidad manifiesta;

Que, en el caso examinado, se advierte que no ha existido ilegalidad en el pronunciamiento, dado que ello se ha debido a un error de aplicación de las disposiciones al procedimiento sancionador;

Con el visto de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 005-2013-MC, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura y el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar **NULA** la Resolución Directoral N° 000162-2023-DGDP/MC y retrotraer el procedimiento sancionador a la etapa resolutoria a fin de que la autoridad de primera instancia se pronuncie respecto a la sanción a imponer.

Artículo 2.- Declarar que carece de objeto pronunciarse respecto del recurso de apelación presentado contra la Resolución Directoral N° 000162-2023-DGDP/MC.

Artículo 3.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural el contenido de esta resolución y notificarla al señor Eddy Alberto Cuadros Chavarría acompañando copia del Informe N° 000644-2024-OGAJ-SG/MC, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.

Documento firmado digitalmente

CARMEN INES VEGAS GUERRERO
VICEMINISTRA DE PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAS CULTURALES